



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO PARA MENORES ACOGIDOS CON FAMILIA AJENA”, CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características de las prestaciones objeto del contrato de referencia y el importe del contrato.

Uno de los principales derechos de todo niño es poder vivir y desarrollarse en un ambiente familiar adecuado, en condiciones de seguridad y estabilidad. Así queda reflejado en la Constitución Española de 1978, que enumera entre los principios rectores de la política social y económica, la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia no institucional que consiste en la integración de un menor, tutelado por la Comunidad de Madrid, en una familia que lo acoge como un miembro más de la misma y se compromete a cuidarlo y educarlo, proporcionándole un ambiente adecuado a sus necesidades hasta que se den las circunstancias oportunas para que pueda volver con su propia familia o se determine otra medida de protección más apropiada.

El acogimiento puede realizarse en familia extensa, cuando entre el menor y el acogedor exista un vínculo de parentesco, o bien en familia no biológica o ajena, cuando no estén relacionados por vínculos de esta naturaleza.

Actualmente, a través de esta vía, cada vez más menores encuentran el entorno afectivo que necesitan en una etapa fundamental para su desarrollo y formación, así como para su plena integración en la sociedad.

La Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, contempla la posibilidad de que, en caso necesario, se faciliten a los menores recursos alternativos a su propia familia para garantizar su desarrollo integral y la adecuada evolución de su personalidad. Desde su aprobación, en la Comunidad de Madrid, la planificación estratégica de la protección de menores incluye como una de sus líneas principales el desarrollo de un complejo programa de acogimiento familiar en el que se vienen llevando a cabo diferentes actuaciones como son la difusión de la figura del acogimiento y captación de familias, el desarrollo de programas de acogimiento en sus distintas modalidades: acogimiento temporal, acogimiento permanente, acogimiento de urgencia; acogimientos especiales, dirigidos a menores con necesidades especiales por enfermedad, discapacidad, problemas conductuales u otros; el Programa de Vacaciones en Familia; y el apoyo psicoterapéutico a menores acogidos y familias acogedoras.

A raíz de la modificación de la normativa en materia de protección de menores introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, este impulso del acogimiento familiar se convierte en un imperativo legal para la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad que, como órgano responsable en materia de protección de menores de la Comunidad de Madrid, debe dotar de los recursos necesarios para darle cumplimiento.

En materia de acogimiento familiar, esta modificación contempla por primera vez, de manera expresa, la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial, en especial, para los menores de hasta 6 años de edad. El nuevo marco legal impone el ejercicio de las medidas de protección en acogimiento familiar salvo excepciones debidamente justificadas y, en todo caso, limita la duración del acogimiento residencial de menores de seis años a un máximo de tres meses.

Todo ello implica una necesidad aún mayor por parte de la entidad pública de potenciar el acogimiento familiar, lo cual va ligado de manera indisoluble a potenciar también el ya existente apoyo psicoterapéutico tanto de los menores como de las familias acogedoras, dada la dificultad intrínseca en las relaciones familiares derivada de las experiencias traumáticas que muchos menores protegidos sufren y que es necesario tratar para facilitar la convivencia y que el acogimiento se desarrolle con éxito, lo que redundará en una adecuada protección del menor acogido.

De la evaluación y diagnóstico de las situaciones que dan lugar al ejercicio de medidas de protección sobre los menores residentes en la Comunidad de Madrid, se viene apreciando el aumento de una especial complejidad que dificulta el inicio del acogimiento familiar o el mantenimiento del mismo para un grupo cada vez más numeroso de menores que, si bien se encontrarían en situación social y jurídicamente adecuada para su acogimiento, presentan importantes dificultades psicológicas o no están preparados emocionalmente para vivir y desarrollarse con una familia ajena a la suya de origen.

Asimismo, esta necesidad de apoyo se presenta en las propias familias acogedoras, para facilitarles recursos cuando se encuentran con conflictos psicológicos y problemas personales de los menores que mantienen acogidos.

El principio general de la acción protectora de la infancia que consiste en la elección prioritaria del acogimiento familiar respecto del residencial, se encuentra limitado de forma muy importante por la escasez de familias disponibles para el acogimiento de especial dificultad, por la falta de profesionalización de las familias acogedoras y por la situación psicológica en los aspectos emocionales, especialmente, de los menores que podrían ser acogidos pero que necesitan un periodo previo de preparación por terapeutas especializados; o bien que, una vez acogidos, necesitan tratamiento psicoterapéutico adecuado, en muchas ocasiones, como única alternativa para mantener el acogimiento familiar y evitar un fracaso de la convivencia, que implicaría el traumático cese del acogimiento y el reingreso del menor en un nuevo recurso residencial.

La mayoría de estos casos que se pretenden atender mediante el servicio que se contratará están caracterizados por una especial dificultad de integración familiar y social, ocasionadas por las circunstancias personales, sociales o familiares de los menores. Dicha circunstancia ocasiona la necesidad de especializar el apoyo psicológico de los menores y las familias a través de profesionales experimentados en la atención a esta población infantil.

Por lo tanto, y dado que el equipo técnico de la Unidad de Acogimiento de la Dirección General responde a las exigencias técnicas de las tareas de supervisión del volumen actual de seguimiento de los acogimientos, muchos de ellos con importantes necesidades de apoyo específico, incluso con graves problemáticas sanitarias y sociales, se añade la necesidad de potenciar aún más el acogimiento familiar para dar cumplimiento del mandato legal y asumir nuevas modalidades de acogimiento, como el acogimiento familiar especializado y el especializado profesionalizado.

Es, en este superior nivel de mayor complejidad, donde se pretende intervenir, al carecer actualmente la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (DGIFFN) de medios propios suficientes para la realización de la tarea descrita y ha de recurrir, mediante un procedimiento abierto, de conformidad con lo estipulado en los artículos 131, 145 a 148 de la LCSP, a una contratación externa para su ejecución por parte de entidades o profesionales que desarrollen actividades análogas al mismo.

Debido a la necesidad de que el apoyo psicoterapéutico se refuerce, resulta imprescindible la contratación de este servicio, ya que el contrato vigente va a finalizar, habiéndose puesto de manifiesto a lo largo de su ejecución la necesidad de ampliar su contenido en cuanto al número de sesiones para atender la demanda existente, pues en varios periodos, el servicio ha tenido lista de espera y ha tenido que ser modificado.

En Madrid, a la fecha de la firma
**LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA
Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Firmado digitalmente por: VALMANA OCHAITA SILVIA
Fecha: 24/01/2016 11:46